

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**

DEMANDANTE	: CESAR AUGUSTO GARCÍA LEZCANO
DEMANDADO :	: CLAUDIA GARCÍA SIERRA, MARÍA VICTORIA GARCÍA SIERRA, JUAN MANUEL GARCÍA SIERRA (EN CALIDAD DE HEREDEROS DETERMINADOS DEL SR. MANUEL JOSÉ GARCÍA MOLINA), MARIELA DEL SOCORRO SIERRA Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-360-31-05-002-2021-00101-01
RADICADO INTERNO	: 273-22
DECISIÓN	:MODIFICA, DECLARA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 341

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante, solicita se DECLARE la existencia del contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre el demandante y los herederos determinados e indeterminados del Sr. Manuel José García Molina, siendo los herederos determinados los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García, y respecto a la cónyuge del causante, la Sra. Mariela del Socorro Sierra, dado que la relación se inició con esta última y con el causante y se continuó sin solución de continuidad con la cónyuge y los herederos, presentándose la sustitución patronal respecto de los herederos y la cónyuge; que el contrato inició el 7 de marzo de 2006 y culminó el 13 de febrero de 2021 por terminación unilateral y sin justa causa por parte de los empleadores; el cargo desempeñado por el demandante era el de Mayordomo.

Como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a los demandados:

- Al reajuste de la liquidación definitiva de prestaciones sociales por no considerar el número total de días laborados, de 5.337;
- Al pago de la indemnización moratoria del art. 65 del CST, por el no pago total de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la que se pagó de manera deficitaria;
- Al pago de horas extras por haber laborado en un horario de 5 a.m. a 6 p.m. de lunes a domingo, con una hora de almuerzo, y descansaba cada quince días, un día y medio;
- Al pago del reajuste de los salarios dejados de pagar durante los años 2017 a 2020 por que fue deficiente su pago mes a mes al tener para el pago de cada mes de salario de esos años el salario mensual del año 2016, teniendo como base anual para el reajuste el valor del salario mínimo legal mensual vigente de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
- Se condene a los herederos del Sr. Manuel José García Molina y a la Sra. Mariela del Socorro Sierra, al pago de la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990, debido a que el demandante no fue afiliado al fondo de cesantías y durante la relación laboral no se consignó a su favor suma alguna por concepto de auxilio de cesantías, por lo tanto, deben los demandados, la cual no se encuentra prescrita al haberse interrumpido de manera natural la prescripción civil, por los siguientes periodos: del 7 de marzo al 31 de diciembre de 2006, cesantías que debieron consignarse en un fondo de cesantías el día 14 de febrero de 2007, se adeuda la sanción moratoria y del periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de cada uno de los años 2007 a 2020 y que no fueron consignados el 14 de febrero del año siguiente, se adeuda la sanción moratoria.
- Al pago de las cotizaciones a pensiones a Colpensiones, desde el mes de noviembre de 2016 y hasta el 13 de febrero de 2021, y las que falten y se hayan dejado de pagar durante toda la relación laboral.
- Las sumas reconocidas sean indexadas.
- Costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que el demandante se vinculó laboralmente el 7 de marzo de 2006 mediante contrato verbal de trabajo, ello es, a término indefinido, con el Sr. Manuel José García Molina y con su cónyuge la Sra. Mariela del Socorro Sierra, en el cargo de mayordomo; el salario devengado era el mínimo legal mensual vigente, hasta el año 2016 pues durante los años 2017 a 2020 no le realizaron incremento de su salario pagándole el salario que correspondía al del año 2016; al inicio de la relación laboral le pagaron

\$408.000, recibiendo en pago mensual a la fecha de terminación de su contrato en febrero de 2021 la suma de \$908.526, por lo que se adeuda el reajuste salarial por los años 2017 a 2020.

El Sr. Manuel José García Molina falleció y la relación laboral continuó sin solución de continuidad con la Sra. Mariela del Socorro Sierra y con los hijos en calidad de herederos del causante, presentándose frente a estos la sustitución patronal. A partir del fallecimiento del Sr. Manuel José García Molina, el actor recibió los pagos de sus salarios de la cónyuge y de sus herederos. El Sr. Cesar Augusto García Lezcano cumplía un horario de trabajo de 5 a.m. a 6 p.m. de lunes a domingo, teniendo una hora o 30 minutos para almorzar, y descansaba cada quince días, un día y medio, y que no pudo disfrutar en su totalidad por la dificultad para conseguirle reemplazo.

Manifiesta que el Sr. Cesar Augusto García Lezcano tenía una relación de subordinación y dependencia, recibiendo órdenes directas, inicialmente por el los señores Manuel José García Molina y su cónyuge, y después de su fallecimiento del primero, de los señores Mariela del Socorro Sierra, Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García. El demandante laboró hasta el 13 de febrero de 2021, fecha en la que le dan por terminado el contrato de forma unilateral y sin justa causa.

En la liquidación definitiva de prestaciones sociales, no tuvieron en cuenta el tiempo total de labores que lo fue de 5.337 días, solo tomaron 5004 días, teniendo una diferencia de 373 días, por lo tanto, la liquidación está mal liquidada por no tomar los días laborados, por lo señalado en el art. 99 de la Ley 50 de 1990; y por los reajustes salariales de los años 2017 a 2020.

El demandante no fue afiliado al fondo de cesantías y durante la relación laboral no se consignó suma alguna de dinero en un fondo de cesantías, adeudándose la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990 por los periodos comprendidos del 7 de marzo al 31 de diciembre de 2006, el auxilio de cesantía que debieron consignarse en un fondo de cesantía el día 14 de febrero de 2007, y del periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de cada uno de los años 2007 a 2020 y que no fueron consignados el 14 de febrero del año siguiente.

Señala que en la liquidación de prestaciones sociales del 13 de febrero de 2021 se incluían para su cancelación:

- El auxilio de cesantía e interés a la cesantía de los periodos del 7 de marzo al 31 de diciembre de 2006, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada anualidad de los años 2007 a 2020, del 1º de enero al 13 de febrero de 2021. Quedando mal liquidadas.
- Prima de servicios de dos periodos de los años 2016 a 2020 y la causada del 1º de enero al 13 de febrero de 2021. Quedando mal liquidada.
- Vacaciones de los periodos del 7 de marzo de 2017 al 6 de marzo de 2018, y sucesivamente hasta el año 2020, y del 7 de marzo de 2020 al 13 de febrero de 2021. Quedando mal liquidadas.
- Indemnización por los periodos trabajados, teniendo en cuenta por el periodo del 7 de marzo de 2006 al 6 de marzo de 2007 (30 días), de los periodos del 7 de marzo de 2007 al 6 de marzo de 2008 (20 días) y así sucesivamente hasta el año 2020, y del 7 de marzo de 2020 al 13 de febrero de 2021 (19 días). Quedando mal liquidado.

Los empleadores no pagaron la seguridad social del demandante desde noviembre de 2016 y hasta el 13 de febrero de 2021, y al estar al día en el pago de la Seguridad Social, conlleva a que el despido sea ineficaz y se debe realizar los aportes al fondo de pensiones.

## **RESPUESTA A LA DEMANDA**

**La curadora ad litem de los herederos indeterminados en su contestación** manifiesta que es cierta la terminación del contrato de trabajo y según la liquidación se puede observar que fueron los empleadores los que finalizaron el contrato de trabajo sin justa causa con el pago de la indemnización; y al efectuar la liquidación de las prestaciones sociales hay diferencia de 373 días. En relación con la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990 señala que el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 no se había vencido el plazo para consignar las cesantías. Frente al pago de los intereses a la cesantía señala que han prescrito las acciones para reclamarlo hasta el 31 de diciembre de 2017, y la prima de servicio para los periodos causados durante los años 2016 y 2017 igualmente prescribieron. Y niega el pago de las indemnizaciones al realizar el pago. Frente a los demás hechos, indicó que no le constan.

Respecto a las pretensiones de la demanda, manifiesta que se acata lo decidido (expediente digital 21).

**Los herederos determinados y la cónyuge del Sr. Manuel José García Molina en su contestación** informaron que es cierto el vínculo laboral del demandante con el Sr. Manuel José García Molina mediante contrato verbal de trabajo, la fecha de inicio y el cargo contratado; el salario pactado; a partir del fallecimiento del Sr. Manuel José García Molina, el demandante recibió los pagos de salarios de la cónyuge y sus herederos, con la salvedad que el demandante se descontaba directamente de las ventas diarias de la leche su salario mensual; acepta los extremos temporales del vínculo laboral; es cierta la dependencia y subordinación que se dio entre demandante y Sr. Manuel José García Molina pero no acepta la dependencia y subordinación entre el demandante y la Sra. Mariela del Socorro Sierra; las funciones realizadas por el demandante; la fecha de terminación del contrato sin justa causa; el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales que se calcularon y cancelaron los intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, indemnización por los periodos trabajados; el no pago de la seguridad social desde noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero de 2021 por no contar con recursos. El hecho relativo al poder otorgado al apoderado no es un hecho. Respecto a los demás hechos indicaron que no son ciertos.

Frente a las pretensiones de la demanda, acepta la existencia de una relación de trabajo verbal, que inició con el Sr. Manuel José García Molina, el cargo, que al fallecimiento del Sr. Manuel José García Molina la relación continuó a cargo de la sucesión, los extremos y la terminación unilateral. Y se opuso a las demás pretensiones de la demanda (expediente digital 31).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 18 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, DECLARÓ que la Sra. Claudia García Sierra mantuvo el giro ordinario del negocio del Sr. Manuel José García Molina para el que prestaba sus servicios el demandante, de modo que esta asumió la posición de empleador.

CONDENÓ a la Sra. Claudia García Sierra por concepto de sanción moratoria prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de \$17.906.060, suma que deberán ser indexadas hasta el monto de su pago; condenó a la Sra. Claudia García Sierra a pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en favor del actor durante el período comprendido entre el 7 de marzo de 2006 y el mes de marzo de 2008 y entre el mes de noviembre de 2016 a febrero de

2021, valor que deberá ser trasladado al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el actor, previa liquidación que realice con base en el salario mínimo legal para cada anualidad.

DECLARÓ probadas parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada en lo que respecta al pago de la sanción moratorias previstas en los art. 99 de la Ley 50 de 1990, e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN respecto de los demandados María Victoria García Sierra, Juan Manuel García Sierra y Mariela del Socorro Sierra.

ABSOLVIÓ de las restantes pretensiones. Y condenó en costas a la demandada Claudia García Sierra.

### **IMPUGNACIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** apeló la sentencia de primera instancia, en primer lugar, frente a la decisión que solo la Sra. Claudia García Sierra es la que eventualmente siguió con el contrato laboral y haberse dado frente a ella la sustitución patronal, argumentando que es claro que la sustitución patronal en este caso, por tratarse de la muerte del empleador y no del empleado, se presenta con quien se beneficien del servicio prestado, lo cual tuvo lugar no solo con la Sra. Claudia García Sierra sino con los señores María Victoria y Juan Manuel García Sierra, y con la Sra. Mariela del Socorro Sierra, al aceptarse que esta última no tuvo vínculo previo de empleadora; señala que en el interrogatorio de parte absueltos por las señoras Claudia García Sierra y Mariela del Socorro Sierra se dijo que la primera de ellas actuaba en representación del grupo familiar y en ese sentido la sustitución se da frente a los que se beneficien de la labor del actor, y en ese sentido solicita se extienda la demanda a los demás herederos y la cónyuge sobreviviente, siendo corresponsables del pago total de las sanciones y de las condenas.

En segundo lugar, en cuanto al auxilio de cesantía correspondiente al año 2020 si bien, no había lugar a cancelarlas porque el contrato terminó un día antes de la fecha de consignación del auxilio de cesantías, pero en su concepto si hay lugar a la sanción por el año 2019, que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, con la obligación de consignarla el 15 de febrero de 2020, la cual se debe extender hasta el día que terminó el contrato laboral (13 de febrero de 2021), y como en esa fecha terminó el contrato existía la obligación no de consignar sino de pagarlas al trabajador al estar en mora.

Finalmente, se aparta de la decisión relativa a la diferencia de los salarios, luego que la Juez indica que no hay suficiente para hacerlo, por los años 2017 a 2020, y se llegó a esa decisión porque los testigos del demandante eran testigos de oídas, pero en el interrogatorio de parte absuelto por la Sra. Claudia García Sierra, ella fue también cuestionada del pago de los salarios, y respecto de una promesa que había hecho al actor, de pagar lo que se le debía cuando se vendiera la finca, queda claro de dicho interrogatorio, con las respuestas evasivas de la demandada y aunado a ello con el pretexto de la situación económica, es por lo que considera la parte demandante que ello da pie a inferir que sí había ese faltante en el salario del Sr. Cesar Augusto García Lezcano, lo cual da lugar a reajustar los salarios y en consecuencia habría lugar de ese reajuste, a la sanción del art. 65 del CST por estar impagos los salarios a partir del 9 de abril de 2018, conforme a los términos de prescripción; que solo fue en la liquidación de prestaciones sociales que se tomó el salario de la anualidad que correspondía, se le hizo el respectivo incremento, pero hacia atrás quedó pendiente y ello da lugar a que se realice el reajuste.

**El apoderado de los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García y Mariela del Socorro Sierra** apela la sanción por no pago del auxilio de cesantía de los años 2019 a 2021, reitera que esta sanción moratoria no se puede aplicar de manera automática, debiéndose analizar si se actuó de buena o mala fe, y en este caso, la Sra. Claudia García Sierra continuó con la operación de la actividad económica a la cual prestaba los servicios el actor, debido a una sustitución patronal que obligó al heredero a asumir el compromiso que tenía el causante, conforme lo estipula la ley, y como representante del causante en el manejo de esa relación laboral, no demerita ni descalifica la buena fe a la que fue sometida por esa fuerza mayor; adicionalmente señala, que en el causal probatorio existe claridad de todo lo que se vivió, que la actividad a la que estaba vinculado el demandante era una actividad residual del Sr. Manuel José García Molina, correspondía a una finca destinada a una pequeña actividad agrícola, que no daba lo suficiente para atender las obligaciones laborales, por lo tanto no se puede descalificar la buena fe, al no existir prueba que indique que en forma libre y autónoma se decidió no pagar las prestaciones económicas al actor. Y lo anterior lo determina probatoriamente, el hecho que era el demandante quien estaba al frente de esa pequeña actividad y quien directamente realizaba el producto para pagarse con el producido su propio salario.

Y en segundo lugar, no comparte la condena al pago de la seguridad social, porque tal y como lo dijo la A Quo, existe un documento en el proceso que da cuenta que se hizo un pago al Fondo de Pensión Protección S.A y el hecho que el fondo no haya llevado a la historia laboral ese pago, es una situación ajena.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** señaló en sus alegatos de conclusión, que el reparo se dirige frente a la decisión adopta en primera instancia de declarar la sustitución patronal solo con la codemandada Claudia García Sierra, pues los beneficiarios del servicio prestado por el demandante son todos los codemandados, y ello se demostró cuando la Sra. Mariela del Socorro Sierra aceptó que la finca era de todos pero estaba solo a nombre del esposo y fue su hija Claudia García Sierra quien se hizo cargo de la finca, y por ello se puede determinar que la Sra. Claudia García Sierra actuaba en representación de la familia, ello es, de su madre y de sus hermanos y no solo a nombre propio. También fue aceptado que se adelantó el proceso de sucesión y fueron repartidos los bienes del causante en el 50% para la cónyuge y 50% para los herederos, por lo que se debe considerar que con la muerte del empleador, son aquellas personas destinadas por ley para sucederlo quienes deberán asumir el pasivo derivado de las obligaciones laborales y de las sanciones ante el incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones de toda índole.

En segundo lugar, se aparta de la decisión de absolver del reajuste salarial aducido en la sentencia por considera que con los testigos de la parte demandante y en especial la declaración de Yohan Sebastián García (hijo del demandante), que vivió personalmente la disminución de los ingresos de su padre al no incrementarse su salario en cada anualidad; además que fue declarado por el demandante la falta de pago completo de salarios y la promesa de pagarlos cuando se vendiera la finca; y dada la confesión de la Sra. Claudia García Sierra al indicar que en el último año el salario pudo quedar debajo del mínimo. Dijo ser ilógico que esta demandada asegurara que el Sr. Cesar Augusto García Lezcano no le informara que el salario estaba por debajo del salario mínimo a sabiendas que ella era la pagadora, además que se entendía, que la falta de pago del salario en forma completa se supliría cuando se vendiera la finca, sin que se haya demostrado que en la liquidación se hizo con los valores correspondientes. Con base en lo señalado quedó



probada que el salario del demandante era menor en los años 2017 a 2022 al pagarse en esos años el salario correspondiente al año 2016, o como mínimo habría lugar al reajuste del último año debido a la confesión de la codemandada, y ese hecho conlleva a dar aplicación de la sanción moratoria del art. 65 del CST.

En tercer lugar, considera que se probó la extensión de la labor prestada por lo que hay lugar al reconocimiento de las horas extras, por tratarse de dineros que constituyen salario; y teniendo en cuenta el salario pendiente de ser reajustado y reconocidas las horas extras, conlleva que la liquidación definitiva de prestaciones sociales sea deficitaria y esto también implica el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago o pago deficitario de la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

En cuarto lugar, resalta la mala de fe del empleador ante la falta de consignación del auxilio de cesantía, sin que hayan demostrado una justa causa válida para tal omisión. Que en primera instancia condenó a su pago, causándola por el año 2018 hasta el día 14 de febrero del año 2019, luego por el año 2019 causándola solo hasta el día 14 de febrero de 2020, pero esta última que debió extenderse hasta el día en que se realice la consignación, que tuvo lugar el 13 de febrero de 2021 cuando tales conceptos, cesantías, fueron incluidos en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, es decir, la sanción debe hacerse en extenso por el periodo que va del 1º de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2020, las que debieron ser consignadas el 14 de febrero de 2020, corriendo por tanto la sanción desde esta última fecha anotada hasta el día 13 de febrero de 2021 cuando fueron pagadas las cesantías.

Finalmente solicita se examine la prescripción de la sanción por el auxilio de cesantías, si hay lugar a ello, porque en este evento con el pago realizado de las cesantías desde el año 2006 y hasta la fecha de terminación del contrato laboral, se ha interrumpido de manera natural la prescripción civil de los tres años, dando lugar a ordenar el pago de las sanciones desde el 14 de febrero de 2007 hasta la fecha.

**El apoderado de los herederos determinados y la cónyuge del Sr. Manuel José García Molina**, presenta reparo a los aspectos de la sentencia que fueron condenatorios en contra de la Sra. Claudia García Sierra, invocando para ello la buena fe que se presume a la luz del art. 83 de la CN y la sentencia

C 1194 de 2008; señala que el manejo que le dio la Sra. Claudia García Sierra a la ejecución y terminación del contrato de trabajo con el demandante, se debe presumir su buena fe y para concluir su actuación fue de mala fe, se probar en forma fehacientemente que su actuación o conducta no fue *“honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus)”*, y en este evento no se puede afirmar que el actuar de dicha codemandada fuera incorrecto al no haber consignado el auxilio de cesantías causadas a partir de la muerte de su padre, pues no existen indicios o pruebas que demuestren que la sucesión del causante contaba con recursos económicos para atender las cargas laborales; no se demostró que la falta de pago de las prestaciones económicas se debiera a capricho de la demanda y resalta que lo que generó la muerte del Sr. Manuel José García Molina (suicidio) se debió a los problemas económicos. Que del análisis de las pruebas en su conjunto se puede inferir, que los señores Claudia García Sierra y Cesar Augusto García Lezcano acordaron que con el producido de la finca, el demandante se pagara directamente su salario y demás gastos, debido a la precariedad de los ingresos familiares. Aunado a lo anterior, sustenta la presunción de buena fe en el actuar de la Sra. Claudia García Sierra, con apartes de la sentencia SL 16.884 de 2016.

### **CONSIDERACIONES**

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar: i) Si la sustitución patronal se presentó frente a los herederos determinados y la cónyuge del Sr. Manuel José García Molina; ii) Si la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990, impuesta por la no consignación del auxilio de cesantías del año 2019, se debe extender hasta el día que terminó el contrato laboral (13 de febrero de 2021); iii) Si hay lugar a reajustar los salarios de los años 2017 a 2020, y en consecuencia, al pago de la sanción del art. 65 del CST por estar impagos los salarios a partir del 9 de abril de 2018, conforme a los términos de prescripción; iv) Si hay lugar a revocar la sanción por no pago del auxilio de cesantía de los años 2019 a 2021; v) Si hay lugar a revocar la condena de pagar la seguridad social de la cual existe prueba del pago.

El análisis se realizará en el siguiente orden:

- 1. De la sustitución patronal frente a los señores Sra. Mariela del Socorro Sierra (cónyuge causante) y Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García (herederos determinados)**

En primera instancia se determinó que la Sra. Claudia García Sierra fue quien se benefició de la prestación del servicio del demandante con posterioridad a la muerte del Sr. Manuel José García Molina, de modo que ocupó el lugar del empleador y continuó con la ejecución del contrato de trabajo sin interrumpir, suspender o extinguir el vínculo laboral con el actor; que la prueba testimonial aportada por el demandante no fue suficiente para demostrar que la relación laboral se haya configurado también con la codemandada Mariela del Socorro Sierra, al ser catalogada por el despacho los testimonios de los señores Joan Sebastián y Adriana (testigos del demandante), como testigos de oídas, los cuales no arrojaron mayor valor de convencimiento para determinar el vínculo laboral con la codemandada mencionada, dado que el primero de ellos indicó que al inicio de la vínculo laboral contaba con poca edad como para determinar que recuerde con exactitud los elementos que determinan una subordinación y la testigo Adriana, afirmó que en pocas oportunidades visitaba la finca, veía a la Sra. Mariela del Socorro Sierra de visita con su esposo pero no se extrae con frecuencia escuchara ordenes impartidas; quedando probado que era la Sra. Claudia García Sierra quien se encargó de la administración de la finca luego del fallecimiento del causante.

Decisión que se REVOCARÁ bajo el entendido que si bien, para la Sala no existe duda que la Sra. Claudia García Sierra fue la persona que asumió el rol de empleador, dado que el demandante estuvo subordinado por ella, el demandante le rendía informes a ella, esta codemandada era la persona encargada de realizar el pago del salario por él demandado, y fue quien solicitó a la sociedad Protección S.A. la liquidación del cálculo actuarial a efectos de realizar el pago de los aportes pensionales por el periodo comprendido entre octubre de 2016 al 13 de febrero de 2021, pues ello se extrae del correo electrónico aportado por la Sra. Claudia García Sierra en la contestación a la demanda (fls 20 y 21 del expediente digital 32), sin embargo, no se puede pasar por alto, que la finca en la cual laboraba el demandante al ser de propiedad del Sr. Manuel José García Molina (según fue informado por las señoras Mariela del Socorro Sierra y Claudia García Sierra en el interrogatorio de parte) con su fallecimiento entraba a hacer parte de la masa sucesoral, y tan es así que en el interrogatorio de parte, la Sra. Claudia García Sierra informó que al momento de realizar el proceso de sucesión, su madre Mariela del Socorro Sierra, se le asignó el 50% del inmueble y el 50% restante fue distribuido a los hijos.

En ese sentido, no se puede considerar que la única beneficiaria de dicho inmueble y de la producción de leche y de los animales que en ella permanecían (vacas y cerdos), era la Sra. Claudia García Sierra, pues los herederos del Sr. Manuel José García Molina debían asumir las pérdidas y ganancias generados por dicho inmueble y la actividad productiva que allí se adelantaba, y en ese mismo sentido, los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García (herederos del causante), eran los que se beneficiaban de la prestación del servicio del hoy demandante Manuel José García Molina, el cual se desempeñaba como mayordomo y ejerciendo las funciones de ordeñar, lavar establos y marraneras, revisar y organizar alambrado, desyerbar, atender los marranos en cuanto a la inseminación, inyectarlos, al igual al ganado (según fue aceptado en la contestación de la demanda), labores que se centraban en mantener el bienestar, orden y aseo del inmueble y atender y velar por los animales que allí se encontraban, labor de la cual se beneficiaron los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García en calidad de herederos a los cual le fue asignado el 50% de la finca que era propiedad de causante en calidad de herederos.

Al respecto se ha pronunciado la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 1479 de 2020, al analizar la sustitución patronal por muerte del empleador, en un caso similar, en el cual las hijas del causante asumieron la dirección del negocio de su padre fallecido, y donde el demandante en dicha oportunidad continuó prestando sus servicios con posterioridad al fallecimiento de quien lo contrató. En esa oportunidad manifestó:

“En el asunto bajo examen, estuvo fuera de toda discusión que el demandante continuó prestando sus servicios con normalidad los días posteriores al 13 de mayo de 2004, fecha de fallecimiento de su primigenio empleador, de modo que a la luz de los efectos del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo ni siquiera resultó suspendido, comoquiera que la muerte de Milciades Correa Matallana no tuvo como consecuencia «*necesaria y directa*» la suspensión de las actividades contratadas.

Siendo ello así, el contrato de trabajo mantuvo su plena vigencia y no resultó modificado ni mucho menos terminado por la muerte del citado empleador Correa Matallana. **Luego, quien se haya beneficiado de su producto tras aquel acontecimiento, estaría llamado a cumplir con las obligaciones y derechos que le asisten al empleador.**

Respecto de los efectos de la muerte del empleador, sobre el contrato de trabajo, ya ha dicho esta Corporación (CSJ SL2346-2019; CSJ SL 7 mar. 1996 rad. 7755) que,

*[...] **sus herederos** no pasan a ser sus representantes en los términos previstos en el artículo 32 del CST, sino que entran a ocupar su lugar en las diferentes relaciones jurídicas y en lo que al contrato de trabajo se refiere, suele darse la sustitución de empleadores en los términos previstos por el artículo 67 ibídem o, si es del caso, se produce la subrogación de la deuda laboral pendiente después de terminado el nexo laboral [...].*

Así las cosas, resultó equivocado el Tribunal cuando supeditó los efectos de la sustitución de empleadores a la existencia de una empresa como una unidad de explotación económica formalizada, pasando por alto los eventos, como el presente, en los que quien funge como empleador es una persona natural que fue reemplazado por la fuerza de la muerte, por otro, quien asumió su posición con plenitud de derechos y obligaciones.

A esta altura del debate importa resaltar que **fueron precisamente las demandadas, Claudia Correa y Silvia Forero quienes se beneficiaron de la prestación del servicio del actor aun cuando la sucesión del finado Correa Matallana no había sido finalizada, de modo que ocuparon conjuntamente el lugar del otrora empleador y continuaron con la ejecución plena del contrato de trabajo, sin interrumpir, suspender o extinguir el vínculo. (...)** (Resalto de la Sala)

En ese orden de ideas, se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia, para en su lugar DECLARAR que la sustitución patronal acaecida por el fallecimiento del Sr. Manuel José García Molina, se presentó por los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García, y no exclusivamente por la Sra. Claudia García Sierra. En consecuencia, serán ellos los llamados a reconocer y pagar las condenas impuestas en este proceso ordinario laboral.

Ahora bien, frente a la sustitución patronal en cabeza de la Sra. Mariela del Socorro Sierra, no se accederá, en primer lugar, por no haber sido demostrado por parte del demandante que el contrato celebrado en el año 2006 fue igualmente con ella, dado que las declaraciones de los señores Yohan Sebastián García González y Adriana María Montoya Gallego (hijo del demandante y vecina) no son testimonios que hayan estado presentes al momento en que los señores Cesar Augusto García Lezcano y Manuel José García Molina celebraron el contrato de trabajo, dado que el primero de los testigos aceptó que para el año 2006 (cuando inició el vínculo laboral de su padre), contaba con tan solo 4 años de edad, y la Sra. Adriana Montoya informó que conoció al actor en el año 2007, ello es, con posterioridad a la celebración del contrato.

En segundo lugar, tampoco se puede tener como verdadera empleadora a la Sra. Mariela del Socorro Sierra con posterioridad a la muerte de su cónyuge,

en vista que los testigos de la parte demandante informaron que era la Sra. Claudia García Sierra era la persona encargada de realizar el pago de los salarios al demandante, evidenciaron que le daba ordenes al actor, informaron que la Sra. Mariela del Socorro Sierra con posterioridad a la muerte de su cónyuge en pocas oportunidades fue a la finca donde laboraba el Sr. Cesar Augusto García Lezcano; informó el testigo Yohan Sebastián García González que en las visitas que había realizado la Sra. Mariela del Socorro Sierra a la finca, en los años 2016 a 2021 no recuerda haber visto que ella le hubiera dado instrucciones al demandante, relativas al manejo del ganado o de la leche; y el demandante aceptó que era la Sra. Claudia García Sierra quien le autorizaba descontar de la venta de la leche su salario y era a ella a quien periódicamente le debía rendir cuentas. Queriéndose significar con lo anterior que fue la Sra. Claudia García Sierra quien en forma personal y directa asumió las funciones de una verdadera empleadora y no la Sra. Mariela del Socorro Sierra.

Finalmente, no hay lugar a declarar la sustitución patronal respecto de la Sra. Mariela del Socorro Sierra, dado que no ostenta la calidad de heredera del Sr. Manuel José García Molina, bajo el entendido que los órdenes hereditarios consagrados en los arts. 1045 a 1051 del Código Civil exclusivamente permite que un cónyuge supérstite herede en el tercer orden hereditario junto con los hermanos del causante, en los eventos en que no haya descendentes ni ascendentes. Siendo, así las cosas, se debe entender que, en este evento, que la Sra. Mariela del Socorro Sierra no ostenta la calidad de heredera, al existir los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García, como herederos en el primer orden hereditario. En consecuencia, el 50% del inmueble que informaron le fuera adjudicado a la Sra. Mariela del Socorro Sierra, tuvo lugar en virtud de la porción conyugal mas no como heredera.

## **2. En lo que atañe a la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990**

Pretende la parte accionada que la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía causada del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 y cuya obligación de ser consignada era hasta el 14 de febrero de 2020, la mora sea extendida hasta la terminación del contrato laboral (13 de febrero de 2021), dicha solicitud no será acogida por la Sala, bajo el entendido que en primera instancia fue reconocida en forma correcta y en los términos solicitados en el recurso de apelación.

Ello se concluye, toda vez que en la parte considerativa de la providencia se condenó al pago de \$17.906.060 por esta sanción moratoria, valor que se conforma por los siguientes aspectos:

- La condena por esta sanción sería a partir del 9 de abril de 2018 por haber operado el fenómeno de la prescripción, por lo tanto, la sanción por la no consignación de las cesantías correspondientes al año 2018, y a razón de \$26.041 diarios, se liquidó hasta el 14 de febrero de 2019, ascendiendo la sanción para esa anualidad a \$7.968.668.
- Por las cesantías causadas para el año 2019, las cuales debieron ser consignadas a más tardar el 14 de febrero de 2020, generándose la sanción desde el **15 de febrero de 2020 hasta el 14 de febrero de 2021 a razón de 27.604 diarios, para un total de \$9.937.332 como sanción.**
- Y frente al auxilio de cesantía proporcional causada para el año 2020, la parte tenía la obligación de consignarlas a más tardar el 14 de febrero de 2021, pero al haber finalizado el contrato de trabajo el 13 de febrero de dicha anualidad no hay lugar a consignar las cesantías, siendo lo procedente la entrega directa al trabajador, como se realizó en la liquidación de prestaciones sociales.

Aunado a lo anterior, en lo que respecta al recurso de apelación de la parte accionada, en el que se solicita la absolución del reconocimiento y pago de la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990.

La Corte Suprema de Justicia, ha manifestado en forma reiterativa, la necesidad de analizar en cada caso concreto, las razones por las cuales el empleador se sustrajo de la consignación de dicha prestación social al fondo de pensiones a efectos de determinar si existió buena o mala fe. Al respecto señaló en la sentencia SL 8216 de 2016:

*“1º) Esta Corporación, reiteradamente, ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en los arts. 65 del C.S.T. y 99 de la L. 50/1990, procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso, y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables*

*De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del*

*demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014). (...).”*

Así las cosas, siguiendo las directrices del Alto Tribunal, al analizar en el caso concreto, la buena o mala fe de los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García (herederos del Sr. Manuel José García Molina), para la Sala no existe justificación válida ni demostrada de las razones por las cuales se abstrajeron de realizar la consignación del auxilio de cesantías del demandante, pues pese a que en el interrogatorio de parte se invocó por la Sra. Claudia García Sierra, que el dinero recibido por la actividad económica de la finca no era suficiente para cubrir los gastos en ella generados y haber manifestó que no contaban con la capacidad económica para cancelar la liquidación de las prestaciones sociales al actor, brilla por su ausencia prueba que conduzca a que se llegue a corroborar dichas afirmaciones, sin que pueda desconocerse que el artículo 28 del CST señala expresamente que los riesgos o pérdidas del empleador nunca podrán ser asumidos por el trabajador. En este sentido, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia.

### **3. Del reajuste de los salarios y el consecuente reconocimiento de la indemnización moratoria del art. 65 del CST**

En primera instancia se absolvió del pago del reajuste salarial por no haber logrado demostrarlos el actor, dado que a los testigos de la parte demandante no les consta directamente, que el salario haya sido inferior al mínimo legal de las anualidades solicitadas y manifiestan que al demandante le cancelaban menos del salario mínimo legal pero dicho conocimiento lo tienen porque se lo escucharon decir al actor y no por presenciarlo.

No obstante, lo anterior, pretende la parte demandante se revoque la sentencia y en su lugar ser reconozcan los reajustes salariales desde el 9 de abril de 2018 al año 2020, los cuales se infieren, por haber aceptado la Sra. Claudia García Sierra en el interrogatorio de parte, la promesa hecha al demandante de pagarle lo que se le debía cuando se vendiera la finca, además con las respuestas evasivas y ante el pretexto de la situación económica. Y una vez reconocido el reajuste pretende se condene a los demandados al pago de la indemnización moratoria del art. 65 del CST.



Analizada la prueba en su conjunto y en especial, el interrogatorio de parte absuelto por la accionada Claudia García Sierra, considera esta Corporación, que la argumentación expuesta por la parte recurrente, no cuenta con un sustento jurídicamente válido para reconocer el reajuste deprecado, bajo el entendido que en ningún momento se puede inferir del interrogatorio de parte en mención, que al demandante se le adeudaba sumas por concepto de reajuste salarial de los años 2018 y 2019, pues fue enfática la codemandada al señalar “Lo que yo le decía era que si él no conseguía trabajo y estaba todavía ahí, la idea era que siguiera ahí porque **no tenía con que liquidarlo** hasta que vendieran la finca y que **le liquidaban al final las prestaciones**, porque no tenía como asumirlo en ese momento”, y seguidamente reiteró que **los salarios del demandante no dependían de la venta de la finca**. Además, señaló la accionada, que el actor descontaba su salario de los dineros recaudados de la venta de leche, y esta aseveración fue corroborada por el mismo demandante, el cual aceptó que la Sra. Claudia García Sierra en ocasiones le autorizaba descontar el salario de lo producido por la venta de la leche.

En ese sentido, no existe lugar a inferir del interrogatorio de parte la falta de pago de los salarios de los años 2018 y 2019 en forma completa y mucho menos existió confesión del pago deficitario.

No obstante, lo mismo no se puede predicar del salario percibido por el actor en el año 2020, al haber existido confesión de la Sra. Claudia García Sierra que en el último año no le pudo reconocer el salario completo y establece como fecha el año 2020; afirmación que daría lugar a ordenar el reajustar el salario por dicha anualidad. Sin embargo, le queda imposible a la Sala entrar a determinar el valor adeudado en el año 2020, al no existir colillas de pago, consignaciones y demás pruebas documentales tendientes a demostrar la diferencia que deberían reconocer los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García. Carga probatoria que estaba en cabeza del demandante sin que lo haya logrado demostrar, toda vez que los testigos de la parte actora conocen la existencia del pago en forma deficitaria porque el demandante se los decía.

Por lo tanto, ante la imposibilidad de determinar cuánto fue el déficit, se CONFIRMARÁ la decisión absolutoria, adoptada en primera instancia en este punto en concreto.

#### **4. De la orden de pagar los aportes a la seguridad social**

En primera instancia se condenó a la Sra. Claudia García Sierra al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en favor del actor por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2006 al mes de marzo de 2008 y de noviembre de 2016 a febrero de 2021, haciendo claridad la A Quo, que si bien, la parte accionada aportó prueba de un posible pago a la AFP Protección S.A., al ser requerido este fondo de pensiones para que informara si el pago había sido aplicado, en la historia laboral se presentaba su ausencia, sin que se tuviera la oportunidad de establecer la forma adecuada de los pagos.

Decisión que se CONFIRMARÁ, bajo el entendido que la solicitud elevada a Protección S.A. para liquidar los aportes a pensiones fue realizado por correo electrónico del 15 de junio de 2021 (fl. 17 del expediente digital 32); en el expediente digital 36 reposa planilla de autoliquidación de aportes de Protección S.A., por la suma de \$10.709.419, cancelados el 12 de julio de 2021; y en historia laboral actualizada para el 26 de enero de 2022 (aportada por la sociedad Protección S.A. en respuesta a requerimiento que fuera hecho en este proceso), se evidencia que los periodos de cotización realizados por parte del empleador Manuel José García Molina corresponden a los extremos comprendidos entre el **1º de abril de 2008 al 30 de octubre de 2016** (expediente digital 44).

Asistiéndole razón a la A Quo, cuando expresa que no hay forma de determinar que el pago haya sido adecuado, ya que con la planilla de autoliquidación aportada con el respectivo sello de pago no es posible corroborar, que el pago realizado al fondo de pensiones fuera realizado en cumplimiento estricto del cálculo actuarial realizado por la entidad Protección S.A. en la que se incluye los intereses por mora. Además, de que no se encuentra registradas las semanas presuntamente cotizadas, en la historia laboral del mes de enero de 2022, a sabiendas que el pago fue efectuado con 6 meses de anticipación.

Sin costas en esta instancia, teniendo en cuenta que el recurso de apelación de la parte demandante prosperó parcialmente y el recurso de apelación de los accionados no prosperó.

Frente a los demás aspectos alegados por el apoderado de la parte demandante, relativos a las horas extras y el análisis de la prescripción de la

sanción por el auxilio de cesantías, no se hará un pronunciamiento, teniendo en cuenta que el principio consonancia establecido en el art. 66A del CPT y SS establece “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, **deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación**” (resalto fuera del texto).

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

### RESUELVE:

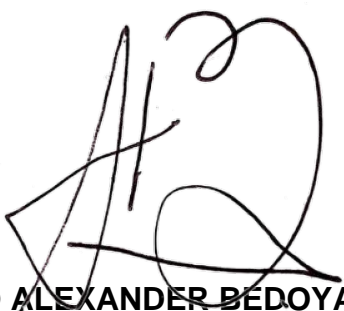
**PRIMERO: MODIFICAR** la sentencia de primera instancia, para en su lugar **DECLARAR** que la sustitución patronal acaecida por el fallecimiento del Sr. Manuel José García Molina, se presentó por los señores Claudia Elena, María Victoria y Manuel José García Sierra, y no exclusivamente por la Sra. Claudia García Sierra. En consecuencia, serán ellos los llamados a reconocer y pagar las condenas impuestas en este proceso ordinario laboral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

**CUARTO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado Único Nacional 05-360-31-05-002-2021-00101-01  
Radicado Interno 273-22



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



## SECRETARÍA SALA LABORAL EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: CESAR AUGUSTO GARCÍA LEZCANO
DEMANDADO :	: CLAUDIA GARCÍA SIERRA, MARÍA VICTORIA GARCÍA SIERRA, JUAN MANUEL GARCÍA SIERRA (EN CALIDAD DE HEREDEROS DETERMINADOS DEL SR. MANUEL JOSÉ GARCÍA MOLINA), MARIELA DEL SOCORRO SIERRA Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-360-31-05-002-2021-00101-01
RADICADO INTERNO	: 273-22
DECISIÓN	:MODIFICA, DECLARA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

### CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 02 de diciembre de 2022 a las 8:00am

### CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 02 de diciembre de 2022 a la 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

SECRETARIO